



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

**ACTOR: MUNICIPIO DE IGUALA DE LA
INDEPENDENCIA, ESTADO DE GUERRERO
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL
65/2005**

**SUBSECRETARÍA GENERAL DE
ACUERDOS DE TRÁMITE DE
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y
DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD**

En diez de noviembre de dos mil cinco se da cuenta con el oficio número 1705/2005 de treinta y uno de octubre pasado, del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el día de ayer, al cual se anexa copia certificada de los autos del juicio laboral 426/2003, promovido por Bertha Sánchez Fernández en contra del Ayuntamiento del Municipio actor en la presente controversia constitucional. Conste.

México, Distrito Federal, a diez de noviembre de dos mil cinco.

Agréguese al expediente para que surtan sus efectos legales el oficio y anexos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mediante el cual desahoga oportunamente el requerimiento ordenado en autos, acúsese su recibo.

Ahora bien, en virtud de que ya se cuenta con los antecedentes necesarios para proveer lo conducente con relación a la tramitación de este asunto, se tiene en cuenta lo siguiente:

PRIMERO. Por escrito recibido en este Alto Tribunal, el veintiuno de octubre de dos mil cinco, depositado en la oficina de correos de la localidad el día

diecinueve del mismo mes y año, Gustavo Adán Tavares, en su carácter de Primer Síndico Procurador Municipal del Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Estado de Guerrero, promovió controversia constitucional en contra de dicha entidad federativa por conducto de su Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Finanzas y Administración, de la Directora General de Tesorería y del Director General de Asuntos Jurídicos, estos dos últimos dependientes de dicha Secretaría ***“...por la afectación que han hecho y pretenden seguir haciendo a las participaciones federales y estatales que correspondientes (sic) al H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Iguala de la Independencia en el Estado de Guerrero, según recibo oficial número SFA/UAJ/655/2005-1819, de fecha 4 de octubre de dos mil cinco, mediante el cual nos pretende hacer una retención más por la cantidad de \$154,401.00 (ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos un pesos) sin tener facultades para hacerlo.”***

El texto de dicho oficio en la parte que interesa es el siguiente:

"Por instrucciones del C. Secretario de Finanzas y Administración, en forma respetuosa, me permito hacer de su conocimiento que el Presidente del H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante oficio N° 1415, deducido del expediente laboral N° 426/2005, requiere a la Secretaría de Finanzas y Administración retener y descontar de las participaciones federales que le corresponden a



Handwritten signature in blue ink.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 65/2005

177

esa municipalidad la cantidad de \$154,401.00 misma que fue embargada para garantizar el cumplimiento del laudo emitido en el juicio laboral citado y que promoviera Bertha Sánchez Fernández.

En base a lo anterior y con el objeto de no lesionar la economía de esa municipalidad, respetuosamente nos permitimos sugerirle la concertación del asunto que nos ocupa y se nos comuniqué oportunamente y a la brevedad posible los términos de dicha concertación y, en su caso, notificación oficial por parte de la autoridad federal y/o autoridad laboral donde instruyan a esta Secretaría la suspensión de la afectación solicitada por el Tribunal del Trabajo, lo anterior con el objeto de no incurrir en responsabilidad y como consecuencia para evitar la aplicación de las medidas de apremio a que se refiere el artículo 138 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero N° 248 al Titular de esta Secretaría, por desacato a una orden de autoridad, independientemente de que de no prestar la atención debida a este asunto, la cuantía se está incrementando diariamente, lo que repercute en la economía de esa municipalidad."

En la demanda también se solicitó que se tuviera como tercero interesado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero "...en virtud de que esta autoridad es la que está ordenando los embargos de las participaciones federales y estatales correspondientes a este H. Ayuntamiento."

SEGUNDO. Como antecedentes del caso el Municipio actor manifestó que el día cuatro de octubre de dos mil cinco, por vía fax, le fue notificado el oficio reclamado, y que dicho documento encuentra su origen en el embargo ordenado en los autos del juicio laboral 426/2003, promovido por Bertha Sánchez Fernández.

TERCERO. En ejercicio de la facultad que a la Ministra Instructora le confieren los artículos 28 y 35 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil cinco, se previno a la parte actora para que proporcionara los antecedentes del caso, y al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero se le solicitó copia certificada de los autos del juicio laboral 426/2003, la cual fue recibida en este Alto Tribunal el nueve de noviembre siguiente.

CUARTO. De la consulta del expediente laboral citado se advierte que la trabajadora Bertha Sánchez Fernández el dieciocho de agosto de dos mil tres, demandó del Municipio de Iguala, Guerrero, la liquidación de los salarios que dejó de percibir, sin causa justificada, desde el día quince del mismo mes y año, hasta la fecha en que se regularice su pago, acción principal que fue acreditada ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, según el laudo que pronunció el cuatro de marzo de dos mil cinco.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 65/2005

Inconforme con la decisión anterior el Municipio actor interpuso demanda de amparo directo, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, quien mediante ejecutoria de ocho de junio de dos mil cinco, negó la protección solicitada.

El veintiocho de junio siguiente se dictó auto de ejecución de laudo por la cantidad de \$154,401.00 (ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos un pesos 00/100, moneda nacional) y se comisionó al Actuario respectivo para que requiriera de pago al hoy Municipio actor, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo se le embargarían bienes suficientes para garantizar el cobro de dicha condena, diligencia que se llevó a cabo el seis de julio posterior, en la que se trabó ***“...formal y legal embargo sobre las partidas presupuestales que recibe este Ayuntamiento Municipal Constitucional de Iguala, Guerrero, por conducto del gobierno estatal y federal...”*** hasta por dicha cantidad.

El ocho de julio de dos mil cinco el Municipio actor en esta controversia, pero demandado en el juicio laboral mencionado, interpuso recurso de revisión contra el embargo decretado, medio de defensa que se planteó con apoyo en los artículos 849 a 852 de la Ley Federal del Trabajo, como norma supletoria del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, preceptos legales que disponen:

“De la Revisión de los Actos de Ejecución”

(REFORMADO, D.O.F. 4 DE ENERO DE 1980)

“Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión.”

(REFORMADO, D.O.F. 4 DE ENERO DE 1980)

“Artículo 850. De la revisión conocerá:

I. La Junta de Conciliación o la Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, cuando se trate de actos de los presidentes de las mismas;

II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o funcionarios legalmente habilitados; y

III. El Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte a dos o más ramas de la industria.”

(REFORMADO, D.O.F. 4 DE ENERO DE 1980)

“Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne.”





(REFORMADO, D.O.F. 4 DE ENERO DE 1980)

“Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas;

II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y

III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución.

Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley.”

En sus agravios el Municipio de Iguala, Guerrero, adujo entre otros argumentos que la diligencia de embargo infringía lo dispuesto en los artículos 9° y 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, que establecen que las participaciones y aportaciones federales entregadas a los Municipios son inembargables.

En la audiencia correspondiente al veintiséis de septiembre siguiente, dada la inasistencia del

representante del Municipio recurrente, se tuvo por no interpuesto su recurso y se ordenó girar oficio al Secretario de Finanzas del Estado de Guerrero para que depositara ante el Tribunal del conocimiento la cantidad adeudada a la parte trabajadora, pues la misma había sido embargada en las ***“partidas presupuestales”*** que le correspondían al Municipio en la diligencia recurrida.

QUINTO. El artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional establece que ***“El ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano.”*** En el caso se advierte que independientemente de algún otro motivo de improcedencia, se actualiza la causal prevista en la fracción VIII, del artículo 19 del mismo ordenamiento legal, que al efecto dispone que las controversias constitucionales son improcedentes en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de esta ley, en relación con el artículo 105, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atento a los siguientes razonamientos.

De los antecedentes relatados se desprende que lo que el Municipio actor reclama es el cumplimiento que dio el Secretario de Finanzas del Estado de Guerrero al mandato judicial contenido en la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil cinco, a través del cual se le ordenó poner a disposición del órgano que conoce del juicio laboral 426/2003, el importe de la cantidad a que fue condenado el mismo Municipio por virtud de la





CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 65/2005

demanda entablada en su contra por la trabajadora Bertha Sánchez Fernández.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

Esto significa que la afectación de las **“partidas presupuestales”** municipales que se reclaman forman parte de la ejecución de un laudo dictado en un juicio laboral en el cual, al figurar como parte demandada el Municipio de Iguala, Guerrero, es evidente que no actuó con su carácter de autoridad, sino desprovisto de sus facultades de imperio y en su faceta de patrón, quien en esa relación de coordinación con sus empleados no está facultado para promover la presente controversia constitucional, pues este medio de control constitucional no constituye un ulterior recurso al alcance de los particulares, ni de las autoridades en sus relaciones jurídicas en las que actúan como tales.

En efecto, este Alto Tribunal ha estimado que las resoluciones de carácter jurisdiccional laboral no son susceptibles de impugnarse a través de la presente vía, pero es lógico que esta improcedencia no se refiere exclusivamente a la decisión que ponga fin al juicio, sino a todas las fases previas y posteriores a ella, entre las cuales se encuentra el procedimiento de ejecución del laudo, pues no habría razón para señalar que el contenido de una ejecutoria no es reclamable en vía de controversia constitucional, pero en cambio la orden para su ejecución sí lo es, ya que en ambos supuestos el carácter con el que comparecen los órganos del Estado no es propiamente el de autoridades, ya sea cuando son demandados por sus trabajadores o cuando se despacha ejecución en su contra, sino que en tales

981

eventos actúan como parte de una relación de trabajo en la que desdoblan su personalidad de entes públicos, para adoptar la que tendría cualquier particular sometido a las prevenciones del derecho laboral, situación en la que no pueden desplegar actos coercibles, imperativos y con la posibilidad de ejercer la fuerza pública.

De esta manera, a la Federación, los Estados y los Municipios les está vedada la vía de controversia constitucional cuando no actúan como personas morales de derecho público, sino como personas morales oficiales de derecho privado, porque ese medio de control constitucional se instituyó para dirimir conflictos interinstitucionales, situación que en principio no se presenta cuando se someten a la potestad jurisdiccional laboral en defensa de su patrimonio, como lo haría cualquier particular.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 117/2000, publicada en la página mil ochenta y ocho, Tomo XII, Octubre de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que, a la letra, dice:

“CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SON LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 98/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, septiembre de 1999, página 703, de rubro:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.', estableció que si el control constitucional busca dar unidad y cohesión a los órdenes jurídicos, en las relaciones de las entidades u órganos de poder que las conforman, tal situación justifica que una vez que se ha consagrado un medio de control para dirimir conflictos entre dichos entes, debe analizarse todo tipo de violaciones a la Constitución Federal, sin importar sus características formales o su relación mediata o inmediata con la Norma Fundamental. Sin embargo, dicha amplitud para ejercitar la acción de controversia constitucional, no puede llegar al extremo de considerarla como la vía idónea para controvertir los fundamentos y motivos de una sentencia emitida por un tribunal judicial o administrativo, incluso cuando se aleguen cuestiones constitucionales, porque dichos tribunales al dirimir conflictos que han sido sometidos a su conocimiento, ejercen facultades de control jurisdiccional, razón por la cual por este medio no puede plantearse la invalidez de una resolución dictada en un juicio, pues ello lo haría un recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en el procedimiento natural, además de que en éste no se dirimen conflictos entre los órganos, poderes o entes a que se refieren los artículos 105, fracción I, de la Constitución Federal y 10 de la ley

181
reglamentaria de la materia, sino que tiene como objeto salvaguardar los intereses de los gobernados."

Así como la tesis 2a. LXXXVII/98, sustentada por esta Segunda Sala, publicada en la página cuatrocientos veintiuno, Tomo VII, junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que, a la letra, dice:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SON LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. De las interpretaciones gramatical y causal teleológica de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que la controversia constitucional no es la vía idónea para combatir resoluciones de órganos jurisdiccionales. Lo anterior es así, en virtud de que este mecanismo de control constitucional está reservado para controvertir actos de gobierno que invadan la distribución de competencias entre los distintos niveles de gobierno o las facultades encomendadas a los Poderes Ejecutivos, federal, estatales o municipales. De esta forma, a través de las controversias establecidas en la fracción señalada del artículo 105 del Código Supremo, no se puede controvertir una sentencia emitida por un tribunal aunque se aleguen cuestiones constitucionales, ya que de las interpretaciones aludidas se sigue que a través de la controversia constitucional se controlan las relaciones de supraordinación entre los niveles





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

de gobierno, poderes o entidades, por invasión a su esfera competencial, cuestión que no se satisface en el caso en el que se combaten resoluciones jurisdiccionales.”

En estas condiciones está claro que la decisión de embargar una cantidad de las **“partidas presupuestales”** que corresponden al Municipio de Iguala, Guerrero, no fue tomada por iniciativa del Secretario de Finanzas de esa entidad federativa, sino en acatamiento a un mandato judicial.

En segundo lugar, es obvio que para examinar la constitucionalidad de dicho acto habría que pronunciarse sobre la legalidad de la determinación dictada en el juicio laboral 426/2003 seguido ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el mismo Estado, en el cual dicho Municipio figuró como parte demandada abandonando la prosecución del recurso de revisión que había interpuesto en contra de la diligencia de embargo respectiva.

Finalmente también es inobjetable que el examen de la legalidad de la diligencia de embargo, y de lo resuelto en el recurso de revisión abandonado por el Municipio ahora actor, no es legalmente posible llevarlo a cabo en cumplimiento de los criterios jurisprudenciales citados, pues es patente que de admitir a trámite el asunto equivaldría a generar un nuevo recurso dentro de la jurisdicción laboral, lo cual desde luego no es en modo alguno aceptable.

581

En mérito de todo lo anterior ha quedado fehacientemente demostrado que en la presente controversia constitucional emerge una causa manifiesta de notoria improcedencia que obliga a desecharla, con apoyo en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional, en relación con lo dispuesto en el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal y 1° de la Ley Reglamentaria citada, al no actualizarse los supuestos que estos preceptos contienen.

El mismo criterio fue sustentado por la Segunda Sala de este Alto Tribunal al resolver el veintiocho de octubre de dos mil cinco, por unanimidad de cinco votos, el recurso de reclamación número 245/2005-PL, interpuesto en contra del auto del Ministro Instructor que desechó la demanda que dio origen a la controversia constitucional 48/2005, promovida por el Municipio de Calvillo, Estado de Aguascalientes, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y del Tribunal de Arbitraje, todos de la misma entidad federativa.



Por lo expuesto y fundado se acuerda:

ÚNICO. Se desecha de plano, por notoriamente improcedente, la controversia constitucional promovida por el Municipio de Iguala de la Independencia, en contra de la orden de embargo dictada por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y ejecutada por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas todos del Estado de Guerrero, mediante el



CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 65/2005

oficio número SFA/UAJ/655/2005-1819, de fecha cuatro de octubre de dos mil cinco.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION

Lo proveyó y firma la Ministra Instructora
Margarita Beatriz Luna Ramos, quien actúa con el
licenciado Francisco Javier Barreiro Perera,
Subsecretario General de Acuerdos de este Alto
Tribunal que da fe.

Esta hoja corresponde al acuerdo de diez de noviembre de dos mil cinco dictado en la controversia constitucional 65/2005 promovida por el Municipio de Iguala de la Independencia, Estado de Guerrero. Conste.

AVA/FJBP/JJRG/KCG

U

C

A



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION